

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país”

Honorables Congresistas:

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, de las Leyes 152 de 1994 y 270 de 1996, y en desarrollo de la facultad prevista en los artículos 154 y 341 constitucionales, así como en el artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, el Gobierno Nacional somete a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual se presenta el ***Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país***.

La formulación del Plan, como mecanismo esencial para el direccionamiento de la política administrativa, responde a un ejercicio riguroso y consistente de planificación económica y social para el corto y mediano plazo, basado en un amplio proceso participativo, de consulta y deliberativo, en el que se recogen las herramientas y estrategias esenciales para garantizar el desarrollo económico y social del país, una paz sólida y estable, una mayor equidad y una ampliación de la educación en el país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país*

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 sometido a consideración incorpora los objetivos y metas propuestas en el Plan de Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos *“Colombia: la paz ya viene”*, tendientes a impulsar el desarrollo de un país más solidario, incluyente, moderno, emprendedor, sostenible y en paz.

Con fundamento en estos objetivos y metas, el PND se sustenta en tres pilares fundamentales: la paz, la equidad y la educación, los cuales se articulan y desarrollan en cinco estrategias transversales (competitividad e infraestructura estratégicas; movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; y buen gobierno), seis estrategias territoriales (Caribe, Eje cafetero y Antioquia, Centro Oriente, Pacífico, Crecimiento y bienestar para los Llanos y Sur de Colombia) y una estrategia envolvente

(crecimiento verde) que promueve la adopción de prácticas verdes en la generación de valor agregado por parte de los sectores económicos. Se trata de una apuesta ambiciosa por parte del Gobierno Nacional, debido no solo a la visión de un país en paz, equitativo y educado, sino también al momento histórico en el cual se encuentra el pueblo colombiano.

Será posible materializar esta propuesta a partir de los cimientos y logros obtenidos en el periodo presidencial 2010-2014. El crecimiento económico promedio en lo corrido de la segunda década de este siglo, 4,8 %, es mayor que el promedio observado en las décadas de los años 1980 (3,5 %), 1990 (2,8 %) y 2000 (4,0 %). La inversión como proporción del PIB ha alcanzado niveles históricamente altos, superiores al 30 %. La inflación de 2013, 1,94 % fue la más baja de los últimos 58 años. En los últimos cuatro años se generaron 2,5 millones de empleos, con una importante reducción de la informalidad, y con una tasa de desempleo que mes tras mes sigue alcanzando mínimos históricos desde que existen cifras mensuales (hace 14 años). El buen desempeño del mercado laboral y las políticas sociales del Gobierno han reducido la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales. La desigualdad, aunque más lentamente, también ha empezado a ceder; los principales indicadores de violencia, como los homicidios y los secuestros, siguen a la baja.

El PND propuesto se ha elaborado observando los principios de planeación previstos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, en coordinación con las entidades y autoridades que participan en el proceso de planeación, contando con la participación ciudadana, y siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución Política de Colombia y la citada ley, tal como se describe en el siguiente numeral.

2. Formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 339, 340 y 341 de la Constitución Política y los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 152 de 1994¹, una vez elegido el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, inició el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país*.

El proceso implicó un trabajo de planeación participativa que se llevó a cabo en conjunto con los ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, las autoridades de planeación de las entidades territoriales, y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como con todas aquellas autoridades

¹ Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

que hacen parte del Sistema Nacional de Planeación, en aplicación del principio democrático.

Con el fin de socializar la parte general del PND, se realizaron 33 foros regionales, en igual número de ciudades del país, y 25 foros sectoriales, con temas específicos incluidos en el documento, tales como la educación, la igualdad de género, los grupos étnicos y los jóvenes, entre otros.

El componente de inversiones del Plan fue sometido a consideración del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el 11 de noviembre de 2014, el cual emitió concepto previo y favorable a las implicaciones fiscales del citado componente. De igual manera, la parte general del PND 2014-2018: *Todos por un nuevo país* se presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) el 13 de noviembre de 2014.

Así mismo, la parte general del plan fue sometida oportunamente a consideración del Consejo Nacional de Planeación (CNP), el pasado 14 de noviembre de 2014, fecha en que también fue enviada al Congreso de la República. El CNP emitió concepto de manera oportuna mediante el documento *Focos estratégicos y de interés para la sociedad civil*.

Una vez agotado este proceso democrático de participación y deliberación, y antes de la presentación del documento al H. Congreso de la República, se analizaron los comentarios recibidos, en particular el concepto emitido por el CNP y las observaciones recogidas durante las mesas regionales y sectoriales, los cuales sirvieron de insumos para los ajustes finales del PND.

Del mismo modo, en cumplimiento de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), el Departamento Nacional de Planeación recibió el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015-2018, con el fin de que fuera incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en sesión realizada el 4 de febrero de 2015, aprobó el documento consolidado del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 152 de 1994, fortaleciendo el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país*.

Agotado el procedimiento previsto en la Ley 152 de 1994 para la elaboración y formulación del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público procede a presentar al H. Congreso de la República el proyecto de ley en

referencia y sus anexos correspondientes, dentro de los términos constitucionales y legales.

3. Aspectos específicos y contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: *Todos por un nuevo país*

El Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento de planificación y gestión del Gobierno Nacional para el desarrollo y crecimiento del país, está conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional².

La parte general comprende normas de carácter programático que señalan los propósitos y objetivos a largo plazo, las metas y prioridades del Estado a mediano plazo y las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental³.

Por su parte, el plan de inversiones contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional a ser ejecutados durante el respectivo plan de desarrollo, así como la especificación de los recursos financieros y los mecanismos necesarios para su ejecución, que determinan las formas, medios e instrumentos para impulsar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo, e implementar sus inversiones públicas.⁴

Considerando el momento histórico por el que está atravesando el país, en el que el acercamiento, diálogo y negociación con grupos insurgentes se está desarrollando de manera simultánea con este proceso de planificación, y la necesidad de adoptar mejores prácticas en las políticas públicas, en consideración a las recomendaciones realizadas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los retos propuestos en la Agenda de Desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas, en la parte general de este Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se presentan metas y objetivos del Gobierno Nacional para implementar las condiciones necesarias para construir una sociedad en paz, equitativa y educada, en el marco de una estrategia envolvente de crecimiento verde, para garantizar la sostenibilidad ambiental, bajo los enfoques de orientación a resultados y de estructura regional para el cierre de brechas territoriales.

Con este propósito, el PND se construye en torno a tres grandes pilares que representan la visión del país para el próximo cuatrenio: la paz, la equidad y la educación. Los aspectos más relevantes de los pilares se destacan a continuación:

² Artículo 339 de la Constitución Política de Colombia.

³ Numeral 3 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 5 de la Ley 152 de 1994.

⁴ Artículo 6 de la Ley 152 de 1994.

Colombia en paz: El país avanza hacia la paz y uno de los objetivos prioritarios del gobierno es la creación de las condiciones necesarias para una sociedad en paz, promoviendo la garantía efectiva de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones con un enfoque territorial, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y la confianza de los colombianos en las instituciones.

Colombia equitativa y sin pobreza: Se promueve la adopción de un modelo de desarrollo más incluyente y sostenible, basado en una concepción de desarrollo humano integral, que ofrezca a los colombianos mejores posibilidades de ingresos, salud, educación, vivienda y protección frente a riesgos.

Colombia la más educada: Como parte de la generación de condiciones para la paz y de un desarrollo económico sostenible, se adopta una visión de la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo. Aquí el objetivo es cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos poblacionales y regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Para alcanzar los objetivos incorporados en cada uno de los pilares del PND, se incorporan cinco estrategias “transversales” y una estrategia “envolvente” de crecimiento verde, que propenden por la implementación de un modelo de desarrollo económico y social consistente con la conservación del ambiente y el cierre de brechas en los territorios.

Las cinco estrategias transversales propuestas en el presente Plan Nacional de Desarrollo son: competitividad e infraestructura estratégicas; movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; y buen gobierno.

Competitividad e infraestructura estratégicas: La estrategia de competitividad e infraestructura estratégicas es la estrategia de crecimiento económico del Plan. Esta estrategia transversal se fija cinco objetivos: (1) el desarrollo productivo, (2) la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, (3) el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad, (4) el desarrollo de la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial, y (5) el desarrollo minero-energético para la equidad regional.

Movilidad social: La estrategia transversal de movilidad social es la estrategia de promoción del desarrollo humano y la equidad en el Plan de Desarrollo, por medio

de la promoción de los ingresos, la salud, la educación, la vivienda y la mitigación de riesgos. Tiene seis objetivos: (1) garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social); (2) mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad; (3) generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales; (4) cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía; (5) impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana; y (6) establecer un apoyo oportuno frente a los riesgos que afectan el bienestar de la población y los mecanismos para la protección de las condiciones de vida de las personas.

Transformación del campo: Esta es la estrategia de desarrollo rural del Plan. Aquí se fijan seis objetivos: (1) ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde; (2) cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales; (3) acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los campesinos; (4) impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo; y (5) contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, y que permita corregir las brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre regiones rurales.

Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz: Esta estrategia incluye los ajustes institucionales que son requeridos para que el Estado pueda cumplir bien su función de garante de la paz. Aquí se establecen ocho objetivos, agrupados en dos grandes acápites: (1) el fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de derechos de todos los habitantes del territorio, y (2) justicia transicional y derechos de las víctimas para la superación de brechas originadas por el conflicto armado. Los primeros cinco objetivos corresponden al primer acápite, y los tres últimos al segundo. Los ocho objetivos son: (1) proveer seguridad y defensa en el territorio nacional; (2) promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial; (3) fortalecer las

instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos; (4) fortalecer la articulación del Estado en un marco de Política Criminal coherente, eficaz y con enfoque restaurativo; (5) enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada; (6) avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas en Colombia; (7) fortalecer y articular los mecanismos de transición hacia la paz; y (8) consolidar la acción integral contra las minas antipersona.

Buen gobierno: La estrategia transversal de buen gobierno busca que el ciudadano y sus derechos sean la prioridad del Estado, y que las organizaciones públicas logren los efectos esperados de su misión: asignaciones eficientes, respuesta a las necesidades del ciudadano, mitigación de las fallas del mercado y promoción de la equidad. Un buen gobierno planea y ejecuta sus recursos de manera eficiente, eficaz y transparente. Sus objetivos son: (1) el fortalecimiento de la articulación Nación-territorio; (2) la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas; (3) la eficiencia y eficacia administrativa; (4) la gestión óptima de la información; (5) la gestión óptima de la inversión y de los recursos públicos, y (6) la promoción y el aseguramiento de los intereses nacionales a través de la política exterior y la cooperación internacional.

Crecimiento verde: Las estrategias que desarrollan el PND se encuentran enmarcadas en una estrategia “envolvente” de crecimiento verde. Esta estrategia se califica como envolvente porque el tema ambiental en este Plan no está definido como una preocupación sectorial más, sino como una estrategia para que todos los sectores adopten prácticas verdes de generación de valor agregado, con el fin de que, tal como lo ordena la Constitución, el crecimiento sea económica, social y ambientalmente sostenible. Sus objetivos son: (1) avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono; (2) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; (3) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.

Así como los objetivos y metas del componente general fueron planteados por estrategias transversales, los instrumentos que posibilitan su ejecución, los cuales se encuentran desarrollados a profundidad en la parte general del PND que se presenta, también fueron incorporados y organizados en el PND de acuerdo con su conexidad directa e inmediata con estas estrategias, sin perjuicio de que estos mecanismos desarrollen uno o varios pilares simultáneamente. Por esta razón, se dice que las estrategias del Plan son transversales.

Como parte de los instrumentos de ejecución se incluyen mecanismos comunes de gestión administrativa, y algunos que resultan novedosos y aportan al manejo

eficiente de los recursos y la orientación de la inversión pública por resultados y con criterios de focalización para el logro de la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios en la población colombiana.

Considerando los objetivos, metas y propósitos del Gobierno Nacional incorporados en los pilares y ejes estratégicos antes mencionados, en la parte del plan de inversiones se incorporan los recursos que se consideran idóneos para garantizar su implementación.

Así mismo, cabe precisar que el Gobierno Nacional, en su compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano, establece en este Plan Nacional de Desarrollo acciones enfocadas en avanzar hacia la consolidación de la paz, que contribuyen al goce efectivo de los derechos de las víctimas, así como a la reparación integral, conforme a la Ley 1448 de 2011 y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, especialmente los contenidos en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. Así mismo, cabe precisar que el Gobierno Nacional, en su compromiso con las víctimas del conflicto armado colombiano, establece en este Plan Nacional de Desarrollo, acciones enfocadas en avanzar hacia la consolidación de la paz, que contribuyen en el goce efectivo de los derechos de las víctimas, así como a la reparación integral conforme a la Ley 1448 de 2011 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, especialmente contenidos en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. Las estrategias de política pública que priorizan la atención a las víctimas del conflicto en este Plan de Desarrollo responden a las disposiciones del decreto 790 de 2012 en cuanto a que los objetivos establecidos para el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia están comprendidos dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

4. Facultades extraordinarias

Por otro lado, como parte de los instrumentos que se consideran necesarios para materializar los objetivos y estrategias plasmados en el presente Plan Nacional de Desarrollo, se hace necesario solicitar habilitación al H. Congreso de la República para expedir normas con fuerza material de ley encaminadas a crear, suprimir o fusionar la estructura orgánica y funcional de diferentes entidades del orden nacional, en los precisos términos señalados en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia.

Es de señalar que la H. Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de solicitar facultades extraordinarias mediante la ley que expida el Plan Nacional de

Desarrollo,⁵ siempre que se justifique de forma clara y precisa la necesidad, conveniencia de que el Ejecutivo regule determinada materia, y que la misma guarde coherencia y conexidad con la parte general y programática del Plan.

En este contexto, se solicitan facultades extraordinarias en atención a las consideraciones y justificación que se señala a continuación:

Tal como está expresado y se concertó durante el proceso de construcción de la parte general del PND, existe una inminente necesidad de transformación del campo y una proyección del país hacia un crecimiento verde; la institucionalidad del sector agropecuario requiere ajustes que faciliten el cumplimiento de los objetivos en materia de tierras, desarrollo rural, asistencia técnica y crédito agropecuario, lo que implica de manera prioritaria buscar esquemas de reorganización institucional que facilite al Estado colombiano la ejecución de la transformación del campo en un corto plazo, lo que implica propender por la implementación de ajustes institucionales en el corto plazo.

Para ello se requiere contar con una institucionalidad específica para fortalecer el tema de tierras, que se encargue exclusivamente de formalización de la propiedad rural, administración de los baldíos de la Nación, procesos agrarios, mercado de tierras, acceso a tierras y fuentes de información. Así mismo, contar con una institucionalidad cuyo objeto sea propiciar el desarrollo rural a través de un fondo que financie las iniciativas que surjan en las regiones y cambie el modelo de intervención hacia uno en el que prime el enfoque territorial. Para lograr estos dos cometidos, se requiere ordenar la supresión y liquidación del INCODER creado por Decreto Ley 1300 de 2003, reasignando algunas funciones.

Para fomentar un proceso de transformación del campo se hace necesario en el corto plazo adelantar acciones orientadas a mejorar los indicadores de productividad, competitividad y sostenibilidad de los distritos existentes en el país, a través de un plan específico de rehabilitación de distritos de riego que incorpore el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura, lo cual a su vez, exige replantear el modelo plasmado en la Ley 41 de 1993.

En materia de financiamiento se requiere desarrollar un sector financiero propio del sector agropecuario y reformular su respectiva institucionalidad, haciéndola moderna, dinámica a los requerimientos del sector, ajustada a la realidad de la actividad rural en Colombia, lo que implica reformular la Ley 16 de 1990.

Por su parte, el componente de apoyo e innovación técnica se convierte en otro eje fundamental para la transformación del campo, por esta razón, se deben hacer los ajustes institucionales para la reorganización de CORPOICA, con el propósito

⁵ Sentencia C -376 de 2008 M.P Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

de consolidarla como la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, asegurando esquemas de financiación y fortalecimiento técnicos sobre la base del nuevo marco legal de la entidad. Lo anterior supone reformular la Ley 607 de 2000.

5. Consulta previa: Pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el Pueblo Rom

El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: *Todos por un nuevo país*, reitera su convencido compromiso con la protección, el respeto y la garantía de los derechos de los Pueblos indígenas, Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el Pueblo Rom, y por supuesto, el derecho fundamental a la consulta previa, contenido en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.

Pues bien, En virtud de los derechos a la participación y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación contenidos en el artículo 40 constitucional y en cumplimiento de las disposiciones legales especiales y las contenidas en las Sentencias C-461 de 2008 y C-331 de 2012 respecto a la consulta previa, es preciso indicar que con ocasión de la elaboración y formulación del PND se garantizaron y propiciaron diversos espacios deliberativos y dialógicos con los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los cuales, como sigue:

1. Se protocolizó la consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.
2. Se culminó el proceso de consulta previa con la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rom.
3. En lo que corresponde a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, tal y como consta en certificación que se adjunta a la presente, el Ministerio del Interior en la actualidad se encuentra en el proceso de cumplimiento de la Sentencia T-576-14, esto es, dirigido a la conformación del espacio nacional de consulta previa en el cual se consultarán todas las decisiones que afecten o pudieran llegar a afectar a estas comunidades de manera directa o indirecta.

En este contexto, es de la mayor importancia señalar que el Gobierno Nacional ha adelantado todas las acciones que han estado a su alcance para socializar los contenidos del Plan y propiciar el efectivo ejercicio del derecho a la consulta previa

de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en lo que corresponde a la formulación y consulta del mismo.

6. Normas de vigencia y derogatorias

Por otra parte, es preciso indicar que con ocasión de un proceso de depuración normativa y con el fin de brindar certeza jurídica respecto a las normas que continúan vigentes y aquellas que se derogan, el presente proyecto de ley deroga puntual y expresamente las disposiciones jurídicas del anterior Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1450 de 2011- que se considera no deben continuar vigentes, advirtiendo que los demás preceptos normativos continúan vigentes hasta que sean sustituidos, derogados o modificados. Lo anterior sin perjuicio de la pérdida de vigencia de las normas que hayan sido redactadas expresamente con una vigencia temporal o con un objeto específico expreso cuya ejecución haya agotado o concretado el mandato contenido en la norma respectiva.

7. Anexos

1. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República
2. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planeación
3. Certificación concepto favorable Confis
4. Acta No. 1133 de aprobación en el Conpes
5. Actas No. 1139 de aprobación en el Conpes
6. Acta de consulta previa indígena
7. Acta de consulta previa rom
8. Certificación de Ministerio del Interior - espacio de consulta previa afro
9. Concepto del Consejo Nacional de Planeación
10. Concepto de Consejo Superior de la Judicatura (1 cd)

Finalmente, honorables Congresistas, se presenta el proyecto de ley para la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual constituye un esfuerzo institucional que pretende la creación de las condiciones necesarias para una sociedad en paz, equitativa y competitiva que ofrezca mejores oportunidades a los colombianos. Esperamos contar con su decidido apoyo y que este documento se siga fortaleciendo con los debates y las propuestas que se presenten en el Congreso.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

Ministro de Hacienda y Crédito Público